JUZGADO DIECISÉIS CIVIL DEL CIRCUITO
Bogotá D.C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Expediente: 110014003054-2022-01062-01 Apelación auto

Procede el Despacho a decidir el recurso de apelación impetrado por la apoderada judicial de la demandante MARITZA JOHANNA PEÑA NOVOA contra el proveído proferido por el Juzgado 54 Civil Municipal de esta ciudad el 16 de noviembre de 2022, por medio del cual se negó la orden de pago deprecada.

I. ANTECEDENTES

1.- En la citada decisión el *a quo* rechazó el mandamiento de pago solicitado por el extremo actor con base en el acta de conciliación de fecha 23 de enero de 2020, toda vez que *la obligación que se pretende ejecutar no resulta clara, por varios aspectos, nótese que, no se indica la fecha desde la cual se inicia el pago de las obligaciones, como tampoco frente a algunos conceptos la forma de pago, pues si bien se acordó que el pago se realizara por cuotas, no se expresó la fecha de su inicio, como tampoco se precisa a que corresponde cada concepto y la forma de pago de los mismos, situación que además no concuerda con lo descrito en las pretensiones invocadas. Es así, que el contenido del acta de conciliación no es entendible, razón por demás para que no preste merito ejecutivo, pues no se expresó con exactitud las obligaciones que debían cumplirse, su fecha de exigibilidad y el concepto al que corresponde cada una, muestra de ellos es cuando se enuncia “quedando un saldo a capital de diez millones ochocientos ochenta y tres mil doscientos pesos Pagados antes del 30 de julio del año 2020”¹.*

2.- Inconforme con la decisión, el ejecutante propuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, señalando que la obligación es clara, expresa y exigible pues proviene de una autoridad competente como lo es la Fiscalía 407 Seccional e hizo tránsito a cosa juzgada. Adicionalmente reiteró lo expuesto en la demanda respecto al incumplimiento del acuerdo y los saldos pendientes de pago².

3.- En auto del 13 de enero de año en curso el Juzgado de primera instancia desató el recurso de reposición mantenido incólume la decisión atacada, precisando que el documento aducido como base de la ejecución, aunque, en principio, proviene del deudor y constituye plena prueba en contra de este, lo cierto es que las obligaciones en él contenidas no se indicaron de manera clara y expresa. Todo lo contrario, su oscura redacción sumada a los vacíos en el mismo, implican que deba entrarse en el terreno de la suposición para dotarle de sentido lógico. Finalmente concedió la alzada invocada en subsidio³.

¹ Archivo 05 del cuaderno principal.

² Archivo 06 del cuaderno principal.

³ Archivo 07 del cuaderno principal.

II. CONSIDERACIONES

1.- El recurso de apelación es una de las herramientas diseñadas por el ordenamiento para que el individuo haga manifiesto su desacuerdo con las decisiones que son adversas a sus intereses. Los recursos provocan reexaminar la cuestión decidida y facilitan la enmienda de las decisiones judiciales por iniciativa de los individuos agraviados.

2.- El problema jurídico a resolver se sintetiza en verificar si el acta de conciliación del 23 de enero de 2020 cumple los requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso, esto es, si las obligaciones allí contenidas son claras, expresas, actualmente exigibles y que provengan del deudor, amén de los demás requisitos formales que deben cumplir este tipo de actos o acuerdos.

Dispone el artículo 422 del Código General del Proceso, que podrán demandarse ejecutivamente las obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba en su contra.

El Tribunal Superior de Bogotá⁴ ha descrito cada uno de los requisitos de los títulos para su ejecutabilidad en los siguientes términos:

*“La **claridad** consiste en que emerjan nítidamente el alcance de las obligaciones que cada una de las partes se impuso, sin necesidad de acudir a razonamientos que no estén allí consignados, esto es, que el título debe ser inteligible y su redacción lógica y racional del número, cantidad y calidad del objeto de la obligación así como como de las personas que intervinieron en el acuerdo.*

*De la **expresividad** se puede decir que en el legajo esté consignado lo que se quiere dar a entender, así que no valen las expresiones meramente indicativas, representativas, suposiciones o presunciones de la existencia de la obligación, como de las restante características, plazos, monto de la deuda etc., por consiguiente, las obligaciones implícitas que estén incluidas en el instrumento de no ser expresas no pueden ser objeto de ejecución.*

*Sobre la **exigibilidad** supone que la obligación puede pedirse y cobrarse sin tener que esperar plazo o condición alguna que la enerve temporalmente.”*

Ha de tenerse en cuenta, además, que una de las características principales de los procesos ejecutivos es la certeza y determinación del derecho sustancial pretendido en la demanda, sea cual fuere la subespecie de ejecución de que se trate, y esa certidumbre *prima facie* la otorga de modo objetivo el documento simple o complejo que *sine qua non* se anexa a la demanda, por lo cual la esencia de cualquier proceso de ejecución la constituye la existencia de un título ejecutivo.

⁴ Tribunal Superior de Bogotá, Sala de decisión Civil. Auto de ocho de agosto de 2019. Ref. Proceso ejecutivo de Linde Colombia S.A. contra Cafesalud EPS. Exp. 2017-00587-03. M.P. Jorge Eduardo Ferreira Vargas.

3.- Descendiendo al caso concreto, como base de recaudo se aportó *acta de conciliación del 23 de enero de 2020 suscrita entre la querellante Maritza Johanna Peña Novoa y el querellado Jorge Hernán Varón Arias ante la Fiscalía 407 Seccional de esta ciudad, donde las partes acordaron lo siguiente:*

“Las partes en conflicto acuerdan en entregar y recibir por el préstamo ante Davivienda la suma de once millones setecientos ochenta y tres mil doscientos pesos, pagando mensualmente una cuota de trescientos sesenta y cinco mil seiscientos veinticinco pesos Pago que deberá realizar el querellado los primeros 5 días de cada mes, en donde el abono a capital corresponde a novecientos mil pesos, quedando un saldo a capital de diez millones ochocientos ochenta y tres mil doscientos pesos pagados antes de 30 de julio del año 2020. Los Veintinueve millones ciento setenta y seis mil seis setenta pesos más cinco millones quinientos mil pesos de interés por el préstamo del dinero de los ahorros, lo que suma un valor total de treinta y cuatro millones seiscientos y seis mil seiscientos setenta pesos. Debiendo continuar con el pago de cada cuota los días 20 de cada mes y terminar el pago de dicho préstamo el 31 de julio del año 2021.”⁵

Seguidamente se habla de los siguientes pagos: (i) *primeros días de cada mes hasta el 30 de julio de 2020. Cantidad: 6 cuotas de \$375.725 y \$10´883.000 que serán cancelados antes del 30 de julio y (ii) 20 de cada mes hasta el 31 de julio del año 2021 (en donde se realizarán abonos extras durante este tiempo hasta completar el valor de \$34´676.670) por la suma de \$800.000. Adicionalmente se indica como acreedor al ejecutado Jorge Hernán Varón Arias y como deudora a la demandante Matiza Johanna Peña Novoa.*

En ese orden de ideas, en primer lugar, se hace necesario señalar que la orden de pago debió negarse de entrada por no haberse aportado prueba de la existencia del acuerdo de conciliación con el lleno de los requisitos legales, ya que solo se aporta la copia de una impresión o escaneo del documento, sin que exista certeza de que (i) el documento sea auténtico, (ii) que el mismo se encuentre en poder de la ejecutante y (iii) y que sea la primera copia expedida por la Fiscalía General de la nación.

Si bien la Ley 2213 de 2022 y demás normas concordantes permiten aportar prueba digital de los títulos ejecutivos, la misma debe generar seguridad en el proceso de que el documento original y que proviene del deudor se encuentra en custodia del demandante o su apoderado, pues esa es una condición *sine qua non* para que el acto sea exigible judicialmente.

El párrafo del artículo 1º de la Ley 640 de 2001⁶ señala que a las partes de la conciliación se les entregará copia auténtica del acta de conciliación con constancia de que se trata de primera copia que presta mérito ejecutivo, sin embargo, en el asunto, se itera, el apoderado actor aportó únicamente una impresión del escaneo o una copia previa, sin que resulte clara su autenticidad y mérito ejecutivo. En consecuencia, forzoso

⁵ Páginas 11 a 15 del archivo 01.

⁶ Vigente para la época en que se suscribió el acta de conciliación. Ley 2220 de 2022 entró en vigencia el 30 de diciembre de 2022.

resulta negar el mandamiento de pago ante la ausencia total del título ejecutivo o acta de conciliación por no acreditarse que la misma es la primera copia autentica expedida por la Fiscalía General de la Nación.

4.- En todo caso, siguiendo el objeto del recurso, comparte este Despacho en su integridad la decisión adoptada por el Juzgado de primer grado, pues de la simple lectura del acuerdo conciliatorio no es posible extraer claramente las obligaciones a las que se comprometieron las partes, ni mucho menos la relación con las pretensiones de la demanda.

A pesar de que se haya suscrito el acuerdo ante una autoridad pública [Fiscalía 407 Seccional], esto no es óbice para que el documento cumpla a cabalidad cada una de las exigencias legales [Ley 640 de 2001, Ley 2220 de 2022 y art. 422 del C.G.P.], a efectos de que pueda ser exigido judicialmente el cumplimiento de lo pactado, ante lo cual, las partes deben ser cuidadosas en la redacción de sus compromisos.

Sin realizar una narración contextual diáfana sobre las razones que avocaron a la señora Maritza Johanna Peña Novoa a interponer una denuncia contra el demandado por un préstamo de \$53'000.000, se habla de un préstamo bancario sin identificarse el mismo, su monto o su estado actual, y diseñándose un sistema de pago por cuotas que no concuerda con las sumas reconocidas y las que se pretendían recaudar. Tal como lo indica el *a quo*, no existe certeza desde que fecha se debían cancelar las cuotas de \$375.625 y \$800.000 hasta el 30 de julio de 2020 y 21 de julio de 2021, respectivamente, es confuso que primero se hable del pago de cuotas y posteriormente de un pago de más de 10 millones; no se precisan los abonos extras que deben realizarse o en qué periodo, teniendo en cuenta los dos grupos de cuotas, y luego de sumar los anteriores valores solo dan un total de \$29'136.950 [cuotas] o \$47.813.620 [metas], lo cual difiere con el valor reconocido como deuda inicial [\$53'000.000].

En el pago del segundo grupo de cuotas se habla de 20 por la suma de \$800.000, lo cual da un total de \$16'000.000, dejándose un saldo de \$18'676.670⁷ pagaderos a través de los *abonos extras*, sin especificarse otra condición, más aún, cuando es más del doble de la obligación pactada.

Finalmente, también existe confusión respecto al acreedor y el deudor, ya que, se indica como querellante a la ejecutante y querellado al demandado, pero luego de redactarse el acuerdo de conciliación, se precisa que el acreedor es Jorge Hernán Varón Arias y la deudora Maritza Johanna Peña Novoa, sin que se hayan hecho las correcciones pertinentes.

5.- En consecuencia, al no aportarse documento autentico que provenga del deudor y, en todo caso, al no ser claras ni expresas las obligaciones contenidas en el acuerdo de conciliación, impera la confirmación del auto apelado, ya que la negación del mandamiento de pago se ajusta al ordenamiento legal y constitucional.

⁷ De lo que debía pagarse hasta el 31 de julio de 2021: \$34'676.670.

Por lo discurrido, el Juzgado,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado 54 Civil Municipal de esta ciudad el 16 de noviembre de 2022, mediante el cual se negó librar la orden de apremio.

SEGUNDO: SIN condena en costas.

TERCERO: DEVOLVER las diligencias al Juzgado de origen. Secretaría deje las constancias del caso.

NOTI FÍQUESE,

Firmado electrónicamente
CLAUDIA MILDRED PINTO MARTÍNEZ
JUEZ

<p>JUZGADO 16 CIVIL DEL CIRCUITO SECRETARIA</p> <p>La providencia anterior se notifica por anotación en el ESTADO ELECTRÓNICO No. 95 fijado el 8 de AGOSTO de 2023 a la hora de las 8:00 A.M. Luis German Arenas Escobar Secretario</p>

JASS

Firmado Por:
Claudia Mildred Pinto Martinez
Juez
Juzgado De Circuito
Civil 016
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **94d6a8c80d2c3b7104490bf560b56e52eecd310f2de4b06829228b1c6192e378**

Documento generado en 04/08/2023 04:56:17 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>